

Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO EN ORALIDAD
Armenia Quindío
E. S. D.

REFERENCIA: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2019 Y AUTO No. 00031 DEL 8 DE MAYO DE 2019 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO.-

JUAN SEBASTIAN HENAO GARZÓN, mayor de edad y vecino de Armenia Quindío, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.773.775 de Armenia Quindío, portador de la T.P. 202632 del C.S.J. y **CARLOS ALBERTO LOPEZ ARENAS**, mayor de edad, vecino de Armenia Quindío, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.549.093 de Armenia Quindío, portador de la T.P. No. 290853 del C.S.J., actuando en nombre y representación del señor **FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO**, mayor de edad y domiciliado en Puerto Boyacá (Boyacá), identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.322.663 expedida en Honda Tolima; muy respetuosamente manifestamos:

PETICION:

Decretar la suspensión provisional de los siguientes actos administrativos, dictados por la **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO, (GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA DEL QUINDIO)**:

1. *Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 00001 Del 25 De Febrero De 2019, adelantado dentro del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2017-01200, por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO (Grupo para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva del Quindío).*
2. *Auto No. 00031 del 8 de mayo de 2019, por medio del cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad Fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019, adelantado dentro del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2017-01200, por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO (Grupo para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva del Quindío); confirmando el fallo inicial.*

HECHOS:

1. Por medio del fallo con Responsabilidad Fiscal No. 00001 Del 25 De Febrero De 2019, adelantado dentro del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2017-01200, por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO (Grupo para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva del Quindío), se impuso a mi representado RESPONSABILIDAD FISCAL, *en cuantía de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 21 CTVS M-CTE (\$459.193.865,21)*; cobijando dentro de la misma providencia a los demás sujetos procesales a saber:

PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal trazabilidad PRF-2017-01200, el cual se adelanta por el daño patrimonial ocasionado al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - OCTAVA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCA» NIT. 800.130.829-8, en cuantía de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 21 CTVS M-CTE (\$459.193.865,21)** debidamente indexada, en contra de las siguientes personas naturales y jurídicas, por su conducta calificada a título de **CULPA GRAVE** conforme quedó establecido en las consideraciones precedentes, quienes deberán responder de manera solidaria por el daño causado, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, así: • **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.322.663, expedida en Honda (Tolima), quien para la época de los hechos, ostentó la calidad de comandante y Ordenador del Gasto del Batallón de ASPC No. 08 «CACIQUE CALARCA», obrando como **CONTRATANTE**. • **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.643.255, expedida en Bogotá D.C., quien para la época de los hechos, ostentó la calidad de Director de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia y Ordenador del gasto, en calidad de **CONTRATANTE**. • **RIMARCO SAS** NIT. 900.075.341-3, persona jurídica - **CONTRATISTA**- que ejecutó el Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078-BASPC08-2014, representada legalmente por el señor **JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.774.905, en condición de **CONTRATISTA**. • **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.** NIT. 900.129.037-2, - **SUPERVISOR**- representada legalmente por el señor **JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACIN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.579.022 de Bogotá D.C., quien ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.079-BASPC08- 2014, el cual tenía por objeto prestar apoyo a la supervisión de manera técnica, oportuna y suficiente; además, tenía obligaciones de carácter general, administrativas, técnicas, financieras y de carácter social frente al Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078- BASPC08-2014 (Contratista con funciones de apoyo a la supervisión del Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078- BASPC08- 2014).

2. El anterior fallo fue objeto de recurso de reposición por parte de éstos apoderados, con fecha 11 de Marzo de 2019, y mediante Auto No. 00031 del 8 de mayo de 2019, (notificado por correo electrónico el día 10 de Mayo de 2019), se resuelve dicho recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad Fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019, adelantado dentro del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2017-01200, por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO (Grupo para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva del Quindío); confirmando el fallo inicial así:

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR EL FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 del 25 de enero de 2019, proferido por los directivos de la gerencia departamental colegiada del Quindío de la Contraloría General de la República en contra de los señores: **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.322.663; **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.643.255 en calidad de contratantes; **RIMARCO SAS** NIT. 900.075.341-3, representada legalmente por la señora **JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.774.905 en condición de Contratista y **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.** NIT. 900.129.037-2, representado legalmente por el señor **JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACIN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.579.022 obrando como apoyo a la supervisión, con funciones de interventor y las Compañías Aseguradoras **QBE SEGUROS S.A.** NIT No. 860.002.534-0; **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.** NIT. 891.700.037-9, **LA PREVISORA S.A.** NIT. 860.002.400-2; **SEGUROS COLPATRIA S.A.** NIT. 860.002.184-6; **ALLIANZ SEGUROS S.A.** NIT. 860.026.182-5, y **LIBERTY SEGUROS S.A.** NIT. 860.039.988-0, en calidad de terceros civilmente responsables, dictado dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF-2017-01200, el cual tiene como entidad afectada al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - OCTAVA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCA» NIT. 800.130.829-8, en cuantía de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 21 CTVS M-CTE (\$459.193.865,21)**

debidamente indexada, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente proveído.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD.

La suspensión de los efectos de los actos administrativos es una institución de raigambre Constitucional, establecida en el artículo 238 de la C.P., mediante la cual se autoriza a la jurisdicción contenciosa administrativa a dejar transitoriamente sin efectos un acto administrativo susceptible de impugnación por la vía judicial, cuando exista abierta contradicción con la ley.

Así las cosas es menester tener en cuenta que la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO, (GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDIO), dentro de los pronunciamientos que realizara a través del fallo con Responsabilidad Fiscal No. 00001 Del 25 De Febrero De 2019 y del Auto No. 00031 del 8 de mayo de 2019, por medio del cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad Fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019; transgredió las siguientes disposiciones constitucionales y de Ley:

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN

CONSTITUCIONALES

Preámbulo de la C.P. y Arts. 1, 2, 4, 13, 29, 93, 230 y 267 de la Constitución Política.

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

ARTICULO 267. "...El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos

Calle 22 # 15 - 53 Ofic. 404 Edificio Aida - Calle 14 N # 10 - 78 B/ La Castellana

Celular: 3148218037 - 3186074858 Fijo: 7339935

Email: lopez.asociados528@gmail.com

Armenia - Quindío - Colombia

ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial...”.

LEGALES:

Arts.2, 5, 23, y 53 de la Ley 610 de 2000

“Artículo 2°. Principios orientadores de la acción fiscal. En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo. “

“Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: – Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. –Un daño patrimonial al Estado. –Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

“Artículo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado

Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes.

PRINCIPIOS:

Principio de congruencia (Art. 281 C.G.P.)

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La contraloría General de la República por medio del cuerpo colegiado que asumió el conocimiento del asunto en donde se declaró como responsable fiscal a nuestro prohijado incurre en un yerro que vulnera directamente el derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política), esto, debido a que no determina la línea del tiempo, ni el fundamento de la responsabilidad que recae en nuestro mandante, desconociendo así los requisitos de la responsabilidad fiscal enmarcados en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 Veamos:

En la motivación que se trae para efectos de responsabilizar a nuestro representado En el auto **POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA E IMPUTA RESPONSABILIDAD FISCAL** se establece que:

- Existe un detrimento patrimonial por una obra inútil
- Se determina como fecha de la ocurrencia de los hechos el día **06 de octubre de 2015**, fecha en la cual se suscribe **“ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN” N° 114 del contrato baspc08-2014...**
- Se acredita la condición de gestor fiscal de nuestro prohijado respecto de la participación en la etapa precontractual y contractual respecto de dos contratos (mantenimiento y supervisión respectivamente)

De lo anterior, se colige que en la imputación de responsabilidad fiscal, se le enrostró a nuestro prohijado, la suscripción de un contrato de mantenimiento que ya en obra, generó una demolición y construcción de dos pisos “inútil”, y la supervisión de dicho contrato, en lo atinente a que se recibe a satisfacción una obra inútil.

No obstante lo anterior, en ese momento procesal se le reprocha a nuestro representado, su condición de gestor fiscal en la firma del contrato, pero queda la sensación que la interventoría o quien recibiera la obra, le dio visto bueno a algo que presuntamente no sirve, lo que lesiona directa y flagrantemente el contenido del artículo 5 de la Ley 610 de 2000; lo anterior, debido a que el nexo causal entre el daño y la conducta desplegada por el gestor fiscal está indeterminada, es decir, no se comparte que con la puesta en ejecución de un contrato cuyos objetos correspondieron a lo ordenado por el nivel central, y solo con la rúbrica de los mismos y firma de acta de inicio que es hasta donde actuó nuestro prohijado, se haya incurrido en una falta tan seria y que tenga directa y determinante injerencia en un asunto atribuible a quien ejecuta obra, es decir, que si se contrata para un asunto

distinto a la demolición de una edificación, ya la óptica de la responsabilidad se observará desde quien ejecuta obra. Atribuirle responsabilidad fiscal a nuestro prohijado sin un nexo causal claro, sería como responsabilizar al ministerio de defensa por crear la necesidad.

Por lo anterior, el primer acto administrativo demandado "FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2019 proferido dentro de PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200 emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO - GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO" se centró en que se planeó una obra ..." Como se observa la Entidad planeó y contrató obras y actividades de mantenimiento, sin embargo, se evidenció, del expediente contractual y la visita de campo, que las obras y actividades realizadas fueron la demolición de una edificación existente de un piso y la construcción de una obra nueva de dos pisos..." Es decir, que si se planeó una obra de acuerdo a las necesidades del CENAC, empero su ejecución que no se hizo durante el lapso de tiempo en que nuestro prohijado fungiera como gestor fiscal de esos contratos, deba responsabilizarlo frente a lo imposible, es decir frente a temas técnicos que además desconoce, pero sin un nexo causal directo que determine per sé, que la intervención de nuestro prohijado generó una obra inútil.

Ahora bien, de un ejercicio comparativo de la motivación de ese primer acto administrativo demandado con el que puso fin a la actuación administrativa, es decir, con el auto No. 00031 del 8 de mayo de 2019, por medio del cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad Fiscal No. 00001 del 25 de febrero de 2019, adelantado dentro del Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2017-01200, por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDIO (Grupo para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva del Quindío); confirmando dicho fallo. Se centra básicamente en lo siguiente:

"En el presente caso, el reproche del despacho es que el TC CALLE MORENO, suscribió un contrato de mantenimiento y cambió su objeto para continuar con otro negocio contractual de obra nueva, lo que conllevó al detrimento establecido en el proveído de marras"

Lo anterior se dio por probado sin estarlo, toda vez que la Contraloría solo se basa en el acta de inicio de obra, suscrito el día 13 de Enero de 2015, para determinar que el señor Coronel Calle, mediante éste documento cambió el objeto del contrato ordenando la demolición de la obra, lo cual no se acomoda a la realidad; pues nada tiene que ver el inicio de obra con lo que está planteando el ente investigador, desdibujando de esta manera la imparcialidad y soporte probatorio que debe enmarcar el fallo analizado, lo cual atenta flagrantemente con el debido proceso, ya que se demuestra que a pesar de existir elementos determinantes para analizar comportamientos individuales, la razón de ser de la investigación era declarar a todos los implicados responsables fiscales.

Y además le atribuyen el verbo rector planear, y entonces cabe preguntarse:

¿Por qué razón se ataca tanto la planeación en el último recurso argumentativo de la contraloría, cuando la problemática inicial fue el recibido de una obra inútil en octubre de 2015?

¿Acaso el problema directo está en la firma de nuestro cliente?

Claramente y como se expresa en el último acto administrativo que se rebate, una cosa es el daño y otra cosa es la fecha de los hechos, pero si en la fecha de los hechos no se encontraba nuestro mandante como gestor fiscal, y estos fueron determinantes para la causación del daño patrimonial, ¿por qué entonces se ataca finalmente la planeación? No es, una salida grosera que deja en el aire el nexo de causalidad como requisito sine qua non para endilgar responsabilidad a nuestro patrocinado?

Por otro lado se dice en el fallo confirmatorio que **"En el presente caso, el reproche del despacho es que el TC CALLE MORENO, suscribió un contrato de mantenimiento y cambió su objeto para continuar con otro negocio contractual de obra nueva, lo que conllevó al detrimento establecido en el proveído de marras"**

Esto significa que el reproche fue cambiando entre la imputación, el primer fallo y finalmente se acomoda en el último fallo o acto administrativo demandado, y aquí cabe resaltar que nuestro prohijado nunca cambió el objeto contractual, fue solo en terreno, quienes intervinieron el inmueble, los que: o desarrollaron algo distinto, o

encontraron situaciones propias de la teoría de la imprevisión, o sencillamente hicieron algo no contratado, pero que en campo se haya realizado algo distinto, no es determinante ni "causa de lo causado", esto para hacer hincapié en que ninguna de las alternativas planteadas en contra del T.C. FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO confluyen con el requisito de acreditación y prueba del nexo de causalidad. Estas situaciones atacan y vulneran el debido proceso administrativo enmarcado directamente en el artículo 29 de la constitución política -Debido proceso administrativo-

Por otro lado, nunca se resolvió lo atinente a la caducidad de la acción fiscal, no por la genérica de los cinco años, sino, por lo anotado en los descargos relativo al artículo 45 de la Ley 610 de 2000 que expresa: *"Término. El término para adelantar estas diligencias será de tres (3) meses, prorrogables hasta por dos (2) meses más, cuando las circunstancias lo ameriten, mediante auto debidamente motivado."*

-Apertura indagación preliminar Auto No. 001 de noviembre de 2016.

-Cierre de indagación preliminar y traslado al grupo de investigaciones Juicios -Fiscales y Jurisdicción Coactiva Auto No. 002 del 27 de abril de 2017.

-Apertura e imputación de responsabilidad fiscal Auto No. 0091 del 21 de noviembre de 2017, notificado el 30 de noviembre de 2017.

Bajo las fechas anteriormente indicadas se encuentra que la entidad contó desde el día 27 de abril con el término de tres (3) meses para realizar la debida instrucción de la investigación, sin embargo se presentaron oficios internos en el ente de control que generaron devoluciones reiteradas del expediente, siendo el último oficio remitido al Gerente Departamental del Quindío el día 14 de julio del año 2017, pero solo se conoció del auto de apertura hasta el día 30 de Noviembre de 2017, presentando una eventual extemporaneidad en la actuación del ente fiscal, de la cual se espera el cuerpo colegiado revise con el debido detalle.

De lo anterior, se colige que los actos administrativos demandados, aparte de ser falsamente motivados, devienen de incumplimiento a normas positivas que no se cumplieron, contrariando los fines del estado (Art 2 C.P.) debido a que nuestro mandante esperaba un fallo que se encontrara enmarcado dentro de los postulados del art. 13 y 267 constitucionales, debido a que la ambigüedad de las decisiones atacadas han generado un trato indigno y diferenciado a nuestro poderdante contrariando los principios orientadores de la acción fiscal (art. 2 Ley 610 de 2000 en concordancia con el debido proceso constitucional. Por otro lado, se han desconocido los elementos de la responsabilidad fiscal que contempla el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, pues no quedó clara y debidamente determinada la acción u omisión determinante en el daño, y sobre este elemento cabe resaltar, que como la contraloría intervino apresuradamente, este no pudo ser resarcido debido a que nunca se ejecutó por parte del contratista la totalidad del presupuesto que se tenía para la ejecución contractual, es decir, el daño siempre fue potencial y nunca cierto, pues, la obra deja de ser inútil, si pudiere ser terminada., y en este sentido, se vulnera el artículo 23 de la norma en cita debido a que la certeza del daño es tan nublada que no se encuentra un solo argumento que acredite que nuestro mandante es responsable de un detrimento que no existe, y no existe porque una obra que pueda ajustarse a la norma NSR 10 y bajo el mismo presupuesto que se tenía para el efecto siempre deja un daño potencial, no verificado y relativo a situaciones de obra y no del señor CALLE MORENO.

Se tiene como vulnerado además el principio establecido en el artículo 281 del C.G.P por la abierta contradicción entre el análisis de responsabilidad que se hace de nuestro cliente. Así mismo, procede aseverar que, cuando la ley establece las razones que autorizan la expedición del acto administrativo, está limitando en doble aspecto al ente administrativo: en primer lugar, le fija los únicos motivos que justifican la emisión de voluntad y, en segundo lugar, le impone la obligación de motivar su acto. Además, en jurisprudencia del Consejo de Estado, con reiterada solvencia conceptual se ha sostenido que la facultad discrecional no es absoluta, sino que va encaminada al logro de buen servicio público. Las limitaciones, en el caso sub-júdice, se imponen, como está demostrado con la violación de la Constitución y la ley.

"El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de las garantías jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso." (T-078 de 1998).

Cuando se dice que el proceso contencioso administrativo está instituido para ejercer el control de legalidad de la actividad administrativa, el objeto entonces de ese control, está constituido por el "principio de legalidad", el cual consiste en la sujeción jerárquica de las normas positivas.

La violación directa resulta de la confrontación, sin intervención de factores intermediarios de la norma aplicada al acto acusado y la norma superior que se estima violada, de esa confrontación puede resultar que la administración, ha cometido un error de derecho.

Queda así acreditado la violación directa de las normas en que deberían fundarse los actos administrativos objeto de reproche que generan una falsa e indebida motivación que necesariamente deberán acarrear que mientras se determina su nulidad, en lo que respecta a las violaciones del debido proceso en contra del señor CR. FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO, el Honorable Tribunal determine la posibilidad de suspender provisionalmente dicho acto administrativo.

PRUEBAS

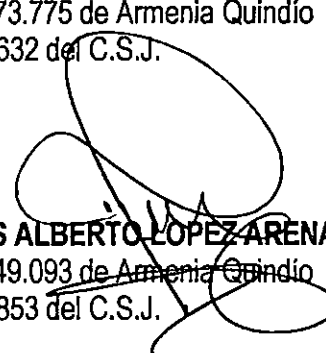
Las copias de dichas providencias y, en general, las demás pruebas pertinentes, se encuentran anexas a la demanda de nulidad con restablecimiento del derecho que hemos incoado junto con este incidente de suspensión provisional, que es parte de la misma.

Del Honorable Tribunal y de los señores magistrados.

Con todo respeto,



JUAN SEBASTIAN HENAO GARZON
C.C. 9.773.775 de Armenia Quindío
T.P. 202632 del C.S.J.



CARLOS ALBERTO LOPEZ ARENAS
C.C. 7.549.093 de Armenia Quindío
T.P. 290853 del C.S.J.